

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA

José García Fuentes, Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, en uso de las atribuciones legalmente conferidas por el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y de conformidad con el Acuerdo de Delegación de Facultades adoptado en sesión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria del día 24 de noviembre de 2005, con esta fecha adopta la siguiente resolución con base en los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

HECHOS

Primero. - Con fecha 4 de octubre de 2022 se remite por Puertos del Estado a esta Autoridad Portuaria un escrito de _____, en representación de _____, en el que se solicita «Información económico-financiera y de actividad real de los prestatarios» del Servicio Portuario de Remolque en la Autoridad Portuaria de Motril.

Segundo. - Con fecha 21 de octubre de 2022, dada la extensión de la información objeto de la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), se acordó la ampliación del plazo de resolución por un mes.

Tercero. - Con fecha 16 de noviembre de 2022, se consideró que la solicitud podría suponer una hipotética afectación de los derechos o intereses de la empresa prestadora del servicio de remolque, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.3 de la LTAIBG, se estimó oportuno otorgar a ésta un plazo de quince días para que pudieran realizar las alegaciones que estimaran pertinentes. La petición de alegaciones fue notificada a la empresa prestadora del servicio el 23 de noviembre de 2022. Durante el plazo de alegaciones quedó en suspenso el plazo de resolución del expediente.

Cuarto. - Una vez transcurrido el período de trámite de alegaciones, sin que la interesada haya formalizado el mismo, se reanuda el plazo de resolución que había sido suspendido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Derivado de lo dispuesto en los artículos 17 y 20 de la LTAIBG, en concordancia con el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, es el órgano competente para resolver las solicitudes relativas a información que obre en su poder, por afectar al ámbito de las funciones que tiene encomendadas.

2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, *como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones"*.

Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado, o bien porque obra en su poder por haberla obtenido en el ejercicio de sus funciones, en el desarrollo de las competencias que tiene atribuidas.

3. El artículo 15 de la LTAIBG analiza tres supuestos distintos de datos de carácter personal en función de si la información solicitada contiene datos especialmente protegidos o no, dotando a los primeros de una mayor protección en atención a que su revelación podría, no sólo dañar un bien constitucional como el de la dignidad humana (art. 10.1 de la CE), sino que afectaría o condicionaría el ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales (derecho al honor y a la intimidad personal y familiar). Es por ello que la LTAIBG establece en el apartado primero del artículo 15 la confidencialidad de estos datos, dotándoles de especial protección mediante una Ley Orgánica (LOPD), ya que esos datos solo podrán ser recabados, tratados y en su caso, cedidos, cuando por razones de interés general se permita, siempre y cuando el afectado expresamente lo consienta. En efecto, el apartado 1 del artículo 15 viene referido a los datos considerados como "especialmente protegidos" en virtud del artículo 9.1 del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) y el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD), es decir, datos que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias o que, hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual.

De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter personal. Por consiguiente, también alcanza a aquellos datos personales públicos, que por el hecho de ser accesibles al conocimiento de cualquiera no escapan al poder de disposición del afectado porque así lo garantiza su derecho a la protección de datos. También por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo.

4. Respecto a la información económico-financiera disponible: (i) Informe de auditoría sobre cuentas anuales a 31 de diciembre de 2021 del prestatario del servicio de remolque y (ii) Informe auditoría facturación 2021 del prestatario del servicio de remolque, se inadmite el acceso de acuerdo con el art.14.1.h) de la LTAIBG, relativo a los límites al derecho al acceso cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. Se trata, de información que afecta a los intereses comerciales de la empresa prestadora del servicio. Así, se estima que la misma implica un riesgo para los derechos de terceros, en este caso los intereses económicos y comerciales de la empresa prestataria del servicio de remolque, dado que no existe un interés público en la divulgación de tal información y ésta puede afectar a la empresa en su situación en el mercado respecto de eventuales competidores, siendo información que la empresa no proporciona, lógicamente, de manera voluntaria, sino obligada por la normativa portuaria.

5. Respecto de la información disponible de la actividad real de la prestataria del servicio, no hay objeción en cuanto a facilitar el número de operativas con uso de remolcador por tramo de GT en el ejercicio 2021. No obstante, se informa al solicitante que el acceso a los datos proporcionados en esta resolución, al amparo de la ley de transparencia, no le exime del deber de observar, en cuanto a los mismos, la normativa de protección de datos de carácter personal que se contienen y de asumir las responsabilidades establecidas en ella para el caso de incumplimiento.

RESOLUCIÓN

A la vista de lo expuesto en los antecedentes, esta Presidencia **RESUELVE**:

Conceder acceso parcial a la información solicitada consistente en:

- Facilitar el Número de operativas con uso de remolcador por tramo de GT en ejercicio 2021.

El acceso se concede por medio de su remisión mediante anexo a esta resolución.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 20.5 de la LTAIBG, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Granada, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Así lo dispongo y firmo.

En Motril, a la fecha de la firma electrónica.

José García Fuentes
